

José Juan Toharia (Coord.)
José Luis de Benito, Josefa García Grande,
Julio Iglesias de Ussel, Emilio Lamo de Espinosa,
Francisco Llera Ramo, Jesús Sánchez Lambás

PULSO DE ESPAÑA 2010

Un informe sociológico

BIBLIOTECA NUEVA
FUNDACIÓN JOSÉ ORTEGA Y GASSET-GREGORIO MARAÑÓN

PRIMERA PARTE
CINCO MIRADAS SOBRE LA ESPAÑA DE 2010

PRESENTACIÓN, por Jesús Sánchez Lambás	15
«QUO VADIS IUSTITIA?», por José Luis de Benito y Benítez de Lugo	19
«LA INCERTIDUMBRE ECONÓMICA QUE NO CESA». ¿DE LA RECESIÓN AL ESTANCAMIENTO?, por M. ^a Josefa García Grande	31
«¿LA SEGUNDA TRANSICIÓN?», por Emilio Lamo de Espinosa	47
«LA CRISIS POLÍTICA», por Francisco Llera Ramo	69
«LA VIDA COTIDIANA EN 2010», por Julio Iglesias de Ussel	85

SEGUNDA PARTE
LA OPINIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA EN 2010: GUÍA ALFABÉTICA DE TEMAS

1.— Autonomías	99
2.— Carencias vitales	105
3.— Cataluña	107
4.— La ciencia y los científicos	109
5.— Confianza institucional	113
6.— Confianza interpersonal	118

7.— La Constitución española	120
8.— Las cosas que importan en la vida	123
9.— Democracia actual: con ella, España mejor que nunca	125
10.— Los desfavorecidos	126
11.— La economía	128
12.— Elecciones primarias	131
13.— Felicidad/control sobre la propia vida	132
14.— Figuras públicas: evaluación comparada	135
15.— Franco/franquismo	139
16.— Fuerzas Armadas	142
17.— Guerra Civil española	146
18.— Identidades (sentimientos de identidad)	149
19.— Iglesia Católica	152
20.— Inmigrantes	154
21.— Intención de voto	158
22.— Izquierda/derecha	160
23.— Listas electorales abiertas	164
24.— Matrimonio: ¿civil o religioso?	165
25.— El matrimonio entre personas del mismo sexo	169
26.— Monarquía	172
27.— ¿Multiculturalidad?	174
28.— Paro juvenil	176
29.— Partidos políticos	179
30.— Política: situación actual	181
31.— Políticos: ¿fidelidad ideológica o pragmatismo?	183
32.— Pluralismo y respeto a la diversidad	185
33.— Príncipe Felipe	188
34.— Religión/religiosidad	190
35.— Religión y política	198
36.— Religiosidad y voto	200
37.— Rey Juan Carlos	201
38.— Salud	206
39.— Supersticiones y «ciencias alternativas»	207
40.— Transición a la democracia	213
FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA, CUESTIONARIO UTILIZADO Y RESULTADOS GLOBALES	219

¿La segunda Transición?

EMILIO LAMO DE ESPINOSA

1. ESPAÑA, POR FIN, PAÍS NORMAL

No hace falta destacar el inmenso progreso que España ha realizado desde los años 60 y, singularmente, tras la muerte del general Franco y en el marco de la constitución democrática de 1978, la de mayor longevidad de la historia española. Un país que hace pocas décadas era el paria de Europa, un resto del fascismo derrotado en la Segunda Guerra Mundial rodeado por democracias vibrantes, con una economía autárquica cuando comenzaba la unión económica europea, con una cultura casi contra-reformista cuando en todo Occidente se sentían ya los efectos de la contra-cultura y la ética postmaterialista, en definitiva, un país a contracorriente de la modernidad que, sin embargo, y en breves años, se sitúa finalmente como un país europeo más e incluso en algún momento parece ser modélico y ejemplar. Y desde luego el proceso español de transición a la democracia ha sido vendido por nosotros (y comprado por otros) en repetidas ocasiones, como si bastara con seguir nuestros pasos para asentar, no solo una democracia estable sino una sociedad próspera y culta.

Y efectivamente España ha sufrido /gozado de un cambio social rápido, intenso y extenso, un éxito que sorprendió al mundo (y a nosotros mismos, por cierto). Quizás porque fue una de las primeras transiciones de la llamada tercera ola (tras Portugal), quizás porque nadie lo esperaba, el resultado fue la España del milagro, un país en el que, durante algunos años, todo era creíble y posible. Y sin duda los historiadores del futuro, cuando analicen los treinta primeros años de la democracia española, concluirán que el reinado de Juan Carlos I fue el período más brillante de la historia moderna de España e incluso puede que el período más brillante de la historia de España *tout court*. Una opi-

nión que no es por fortuna patrimonio de las elites; como muestra la encuesta de Metroscopia que comentamos, nada menos que un 72% de los españoles cree que, *con todos sus posibles defectos e insuficiencias, la actual democracia constituye el período en que mejor ha estado nuestro país en su historia*. Una opinión que se extiende uniformemente por grupos de edad o de sexo por toda la sociedad española, aunque desciende levemente entre las mujeres y los jóvenes (al 68%). Y tienen razón. Y sabemos por otros estudios que, muy por encima de la Guerra Civil, los españoles consideran la transición a la democracia como el acontecimiento más importante para España (40% frente al 20%).

Y así, ya con ocasión del centenario del 98, a finales del siglo pasado, los españoles descubrimos que los ideales de aquella generación reformista, europeizadora y modernizadora, los ideales de Ortega y Gasset o Marañón, de Besteiro o de Fernando de los Ríos, se habían realizado. Si España era un problema cuya solución estaba en Europa, la casi total y completa europeización de España nos había dejado sin problema. El país «desviado» y «excepcional» en lo negativo, que no había llevado a cabo la revolución industrial, ni fue capaz de generar una burguesía ilustrada, ni había tenido ciencia ni pensamiento, era ya, por fin, normal. España había dejado de ser diferente. Y con ello pasábamos de la segunda a la primera división internacional, y en algún momento, y no sin ingenuidad, nos pudimos creer ubicados incluso en el puente de mando de la gestión del mundo.

Ello resultó posible por una rara casualidad histórica en la que se suman muchas circunstancias. Que Franco muriera tarde, tras el desarrollo de los años 60, fue una de esas circunstancias favorables, pues la clase media incipiente constituyó el colchón de la nueva democracia. Pero que muriera no muy tarde, de modo que la memoria del horror de la guerra estuviera aún viva, fue otra circunstancia favorable, pues ese recuerdo colectivo del horror alimentó la voluntad de consenso y el «nunca jamás». Y sobre todo ello, un proyecto político modernizador que unió a todos los españoles, de izquierda o de derecha, burgueses o proletarios, del centro o de la periferia: debíamos ocuparnos de los problemas del futuro más que del pasado para «cerrar con siete llaves el sepulcro del Cid» (o de Wifredo el Pilós, o de cualquier otro), y olvidarnos de la pregunta acerca del ser de España (¿una, varias?) para construir, para hacer, una España nueva. Y eso es una nación: no un recuerdo del pasado, ni siquiera una historia común sino, sobre todo, un proyecto de futuro que orienta, une y ofrece esperanza colectiva. Pues el futuro es siempre un juego de suma positiva.

Y de nuevo es de destacar que no estamos ante opiniones de minorías. La Transición es motivo de orgullo para un 80% de los españoles; y fue posible y tuvo éxito porque todos los líderes políticos compartieron el mismo *espíritu de consenso para buscar soluciones y acuerdos pensando más en el interés general del país que en el de sus propios partidos* (82%). Situación que se vive con nostalgia y se contrasta con el presente en el que *los principales partidos políticos han abandonado el espíritu de consenso de la Transición y sólo piensan en sus exclusivos intereses partidistas* (88%).

Así, a comienzos de este nuevo siglo, España podía vanagloriarse de haber disfrutado del más largo período de democracia y libertad política, de prosperidad económica y de seguridad colectiva, como jamás en su historia. Y no sobra recordar que eso, es decir, seguridad, libertad y prosperidad, es cuanto un ciudadano sensato puede exigir de cualquier sistema político. La larga noche de la España cainita, aislada, pobre, iletrada e ignorante, había quedado atrás.

Incluso ahora mismo, en medio de la crisis económica más prolongada y profunda que hemos vivido en más de cincuenta años, el sondeo realizado por Metroscopia muestra un país feliz (nada menos que el 82%), con alta satisfacción con la vida (un 7 sobre 10), que goza de buena salud (79%) y que, aun cuando califica la situación económica como mala o muy mala (nada menos que un 88%), valora mucho mejor su situación económica familiar (un 43% la considera buena versus un 30% que la percibe mala o muy mala). Datos confirmado por numerosos sondeos, algunos comparados, que muestran un país satisfecho.

No se cambia lo que funciona, aconseja la sabiduría popular. Y sin embargo, en lugar de asentar y profundizar lo mucho conseguido, desde hace pocos años España se lanzó a una revisión casi total del pasado reciente. ¿Por qué?

2. LA POST-TRANSICIÓN

Es mucho más fácil destruir que construir, y sorprende la rapidez con la que España ha pasado de tocar el cielo con las manos a sentirse de nuevo desorientada e incluso humillada en una crisis casi total que fuerza a movilizar la sociedad civil y hace florecer aquí y allá numerosos intentos de «regeneración». Parece pues que regresamos al 98 pocos años después de haber podido celebrar su superación.

El desconcierto comenzó probablemente con la guerra de Irak en la que nos implicamos en exceso contra la opinión de la mayoría de la población. Aquella división trajo como consecuencia las terribles jornadas del 11 al 14 de marzo del 2004, al borde de la desestabilización democrática. Y aquello trajo como resultado una legislatura compleja, dura, negativa, de confrontación y de crispación. En la que, por ingenuidad, por inexperiencia, o por exceso de ideología, que de todo hay, se puso en marcha un programa de «segunda transición», de revisión de la Transición, en parte necesario, en parte, como veremos, inútil e incluso pernicioso.

Como siempre, son muchas las causas que explican este cambio desde la serenidad del consenso de la Transición a esta no menos paradójica post-transición en la que todos los viejos consensos parecen necesitar una revisión. Y quizás la primera explicación la encontramos en el propio agotamiento del proyecto nacional que unificó al país en los treinta años posteriores a 1975. Un agotamiento por consunción, por éxito, pero que ha dejado a España sin proyecto nacional y, por lo tanto, sin norte y sin elementos de sutura. Pues si hace tres décadas España era un problema que pudo encontrar solución en Europa, hoy vivimos en una España normalizada pero en una Europa paralizada y que difícilmente puede servir como

modelo (y es significativo que la identificación con Europa es hoy más fuerte entre los mayores —7,76 sobre 10—, que entre los jóvenes, 6,97). Uno está tentado de decir que España fue nación durante esos treinta años pero que, al consumir el proyecto, ha dejado de serlo, y viejos y nuevos particularismos han aprovechado el desconcierto para ocupar el lugar de la verdadera política. Una nación sin proyecto común es fácilmente parasitada por proyectos parciales, ya sean nacionalistas, partidistas o de cualquier otra naturaleza.

Como suele ocurrir también, ese agotamiento se encabalga sobre la demografía, sobre un relevo generacional, especialmente visible en el liderazgo político, dado que en España los cambios de mayoría generan en todo caso la liquidación de una generación política y su sustitución por otra (y recordemos que, desde la muerte de Franco, hemos liquidado al menos cuatro generaciones de políticos: los últimos franquistas, la generación de la UCD, la del PSOE de Felipe González, y la de Aznar). Nuevos líderes que eran casi niños durante la Transición, que ignoran lo que fue el franquismo, que no comparten las memorias de la guerra civil y, sobre todo, que dan por descontada la Constitución y la democracia y que tratan con desinterés (cuando no con menosprecio) ese acervo colectivo que ha sido el duro aprendizaje de la modernidad. No es casual que fuera el presidente Aznar quien lanzara por vez primera el eslogan de la «segunda transición», pronto recogido y amplificado por la izquierda y, con mayor fervor aún, por los nacionalismos. Lo que no deja de ser paradójico, pues si durante la Transición fue el miedo a la confrontación y el disenso lo que alimentó el consenso, desaparecido ese miedo regresa el disenso y con él la polarización e incluso el riesgo de confrontación.

Por supuesto este afán revisionista de jóvenes en parte inexpertos, en parte desmemoriados, en parte confiados, no explica en absoluto la profundidad de la crisis española, pues a ello debemos añadir al menos otras tres causas.

La primera es la constatación creciente de que la Constitución está lejos de ser perfecta y en su redacción se cometieron errores importantes. Sin duda el mayor fue no haber sabido articular bien la distinción entre «nacionalidades» y «regiones» para construir un Estado de las Autonomías viable. El punto de inflexión fue el referéndum andaluz de 1980 que, a iniciativa socialista, equiparó esta Comunidad a las históricas, abriendo una espita por la que se iban a colar todas las demás. El resultado hoy es patente: un exceso de transferencias a las CC.AA. sumado a un «modelo» barroco de asimetrías múltiples que está ya en la misma Constitución (hay al menos tres modelos distintos de CC.AA.), pero con una dinámica perversa de igualación al alza, lo que ha conducido a un Estado de las Autonomías inviable, a una hegemonía nacionalista en varias CC.AA. (y utilizo la palabra hegemonía en su sentido duro gramsciano), a una ruptura del principio de igualdad ante la ley (y al regreso del privilegio medieval) y, más recientemente, a la ruptura de la unidad del mercado e incluso de la representación exterior de España. El creciente peso de las CC.AA. (incluidas las del PP) en la vida política fragmenta incluso a los partidos políticos nacionales, que acaban derivando hacia asociaciones cuasi-federales controladas

por baronías regionales que traen viejos recuerdos (y la tentación de comparar el viejo sistema de «oligarquía y caciquismo» al nuevo esquema de las CC.AA. no es fácil de rechazar).

A ello se debe sumar los errores en el desarrollo (o el no desarrollo) de la propia Constitución. La necesidad de pactar una y otra vez con los nacionalistas para asegurar la gobernabilidad (y singularmente la aprobación de los presupuestos) ha llevado a una deriva de competencias alimentadas por la debilidad de los gobiernos de la nación que pagan en autogobierno regional (y en desgobierno futuro) el gobierno actual. Y en estos momentos descubrimos que ni siquiera el gasto público de las CC.AA. es conocido por la Hacienda nacional.

Y finalmente, el tiempo, que no pasa en vano y deja obsoletas ciertas decisiones a la vez que afloran cuestiones nuevas que no fueron relevantes entonces. Por poner un ejemplo: la UE hace tiempo que dejó de ser «política exterior» pero ni fue contemplada en la Constitución. Pero, tanto para esto como para otras cuestiones, el dato que considerar es que la Constitución se caracteriza por un notable blindaje que hace casi imposible su modificación, algo normal (e incluso usual) en otros sistemas políticos (por ejemplo, el alemán) pero prácticamente impensable en España incluso en temas (como la sucesión en la Corona) en los que podría haber consenso entre las dos principales fuerzas políticas. Lo que puede no ser tan malo pues, si se abriera el melón de la reforma constitucional, nadie sabe donde podría acabar.

Esta post-transición en la que nos encontramos, recelosa cuando no enemiga de la Transición, tiene tantas versiones como la misma Transición. Para la derecha se trataría sobre todo de reforzar al Estado frente a su dispersión autonómica, garantizando mejor el principio de igualdad de todos los españoles, una tesis que tiene consecuencias importantes en el estatuto jurídico de las lenguas españolas, la organización de la justicia o la fiscalidad. Para los socialistas las reformas caminarían en sentido contrario para completar la España plural y diversa (un Estado complejo cuando no un Estado central «residual») y permitir una incorporación «cómoda» de las diversas «naciones» atrapadas dentro del Estado, y no deja de ser interesante este abandono por la izquierda de su larga tradición jacobina y centralista, posición que es hoy asumida por la derecha. Finalmente, para los nacionalistas (primero los vascos, después los catalanes), tras haber alcanzado cotas de autonomía como jamás en su historia (y con pocos elementos de comparación internacional), se trata ya del salto desde un Estado más o menos federal a otro claramente confederal, alcanzando la independencia *de facto* si no *de iure*. Y aunque el gobierno de Zapatero supo yugular con rapidez y transparencia democrática el Plan Ibarretxe, quizás uno de sus movimientos políticos más apreciables, cometió todos los errores posibles en la gestión del nuevo Estatuto Catalán, con el resultado de abrir una brecha considerable entre Cataluña y el resto de España (que la encuesta de Metros-copia certifica). Y así, tras las recientes elecciones catalanes, el líder de CIU, Artur Mas, propone como proyecto central para Cataluña el de una «transición nacional» similar a la «transición democrática» que España ya realizó. Todo un

elogio implícito de aquella transición que, sin embargo, olvida al menos dos cosas: la primera es que Cataluña también fue parte (y muy activa) de ella y es ya plenamente democrática; y en segundo lugar, que esta segunda «transición nacional» camina justo en el sentido contrario de la primera.

En resumen, las mismas fuerzas y las mismas tendencias que ya existían hace treinta años sólo que radicalizadas por el paso del tiempo y con menor propensión al pacto y el acuerdo, entonces alimentado por la ilusión de asentar una democracia pero hoy carente de elementos de fusión. Fuerzas y tendencias que, si tuvieran que pactar hoy una nueva Constitución, producirían (si fueran capaces de pactar) algo bastante parecido a la que ya tenemos, pero que viven en la ilusión de que un cambio en la correlación de fuerzas podría serles más beneficioso en esta segunda oportunidad (lo cual sería evidente en el caso de los nacionalismos). La segunda transición, pues, como segunda oportunidad para quienes, bien salieron frustrados de la primera, bien han reforzado sus aspiraciones desde entonces.

El resultado de la post-transición ha sido un alejamiento progresivo de los consensos básicos que fundaron la Transición y la democracia misma. Se abrió un diálogo con ETA engañoso y frustrado olvidando el principio básico de que las armas no debían tener rendimiento político alguno; se abordó una reestructuración territorial con el nuevo Estatuto catalán que ha tenido consecuencias en otros estatutos y ha llevado al nacionalismo catalán al borde de la independencia abriendo una brecha no cerrada entre catalanes y españoles tal que si un 53% cree que es exagerado afirmar que *en el conjunto de España, existe un amplio sentimiento de desafecto y de recelo hacia Cataluña* nada menos que un 44% cree que es realmente así (datos que se suavizan, por fortuna, en la misma Cataluña, donde dos de cada tres creen que es una afirmación exagerada); se inició una reinterpretación del pasado y de la amnistía para asentar la legitimidad de la democracia española en uno de los bandos de la guerra civil, olvidando que nuestra legitimidad estaba en el rechazo a la guerra y no en la aceptación de los postulados de una República fracasada; se le ha dado un vuelco al consenso en política exterior pasando de una España fuertemente europeísta pero claramente proamericana y atlantista, a una política exterior militantemente antiamericana, que ahora fuerza al gobierno a ser casi servilmente proamericano (bordeando el engaño, como muestran los papeles de Wikileaks). Incluso en el tema de la monarquía o en el del laicismo las tensiones revisionistas son evidentes.

Todo ello cambia la mirada, la posición de los españoles y de España. España progresó, como decíamos, porque hizo una apuesta personal, casi íntima. De una parte, mirar al futuro y no al pasado, resolver los problemas de nuestros hijos y no las querellas de nuestros padres o abuelos. Y en segundo lugar, mirar hacia fuera y no hacia adentro, ensimismada, para preguntarse cuántas naciones somos o qué somos, pues el futuro de España está fuera de España. Pues bien, esta segunda transición vuelve la mirada hacia el pasado y hacia adentro, temas que, en lugar de unir y dar fuerza, dividen y debilitan.

Y cuando parecía que, tras la legislatura de la crispación, entrábamos en un período de mayor sosiego, llega la crisis económica, que está siendo el verdadero despertador de la sociedad española.

3. DEMOCRACIA POSTFRANQUISTA

Pero buena parte de nuestros problemas derivan de que, contra lo que puede parecer, no hemos conseguido desembarazarnos del franquismo, como todos creemos y como hubiera sido necesario. Es más, en alguna dimensión, esta segunda transición que se nos ofrece es más bien una antitransición que nos retrotrae al mismo franquismo, aunque sea en negativo.

Por supuesto, pensar que un régimen que dura casi cuarenta años desaparece sin dejar rastro es, evidentemente, una ingenuidad. El maniqueísmo franquista marcó la cultura política de los españoles durante mucho tiempo, pero ha seguido haciéndolo durante la democracia hasta el punto de que no es exagerado decir que muchos de sus rasgos específicos sólo pueden entenderse desde esa perspectiva. Pues la consecuencia de aquel antifranquismo constitutivo es que todo aquello que tuvo contacto o relación positiva con el anterior régimen ha aparecido lastrado por esa hipoteca, pero también viceversa. Lo que tuvo (o pudo tener, o hoy se dice que tuvo, aunque no sea cierto) relación negativa ha gozado de un plus de legitimidad y credibilidad con el resultado de asentar una asimetría básica en nuestra cultura política que lastra ciertas posiciones o aligera otras en función de una experiencia histórica no del todo superada. Asimetría que se ha manifestado en los dos ejes en que se articula la vida política española: el eje izquierda-derecha y el nacionalista-constitucionalista.

Como sabemos, la autoubicación ideológica de los españoles está claramente sesgada a la izquierda. Hay el doble de españoles que se ubican en la extrema izquierda que en la extrema derecha, y 2,5 veces más en el centro izquierda que en el centro derecha. La media actual, según los datos de Metroscopia, es de 4,85 en una escala del 0 (extrema izquierda) al 10 (extrema derecha), cuyo punto central es el 5,5; es decir, la mayoría de los españoles se ubican en el centro-izquierda. Son datos a los que nos hemos acostumbrado, pero son todo menos evidentes. Así, estudios comparados muestran que España resultaba ser el tercer país más a la izquierda de 19 países europeos analizados, más que la totalidad de los socialdemocráticos países nórdicos e incluso que países tenidos por izquierdistas como Francia ¿Quizás porque son más ricos? No, pues otros más pobres se ubican más a la derecha, y no sólo los ex comunistas (como Polonia o Hungría), sino otros como Portugal. Incluso en la actual América Latina hay más población a la derecha que a la izquierda (un 22% versus un 17%) y la media está claramente a nuestra derecha.

Bueno, están en su derecho. Si los españoles quieren ser de izquierdas, pues que lo sean, faltaría más. Pero son datos muy estables, tanto que hacen sospechar que estamos, no ante una variable sino ante un parámetro de nuestra cultura políti-

ca inmune a la experiencia. En América Latina, por ejemplo, la autoubicación sí ha cambiado al ritmo de la emergencia de clases medias, como era de esperar, lo que no ha ocurrido aquí. Al parecer los españoles «son» de izquierdas antes de decidir a quien votan, e incluso antes de valorar políticas o programas; la identidad parece ser previa a los argumentos. Y ello otorga una suerte de hegemonía gramsciana a la izquierda que, a pesar de la profunda crisis del ideario socialista, se siente moralmente superior a la derecha y puede cambiar su programa e incluso sus ideas esenciales sin que pase nada: lo importante es «ser» de izquierdas, no qué cosas proponen o hacen los partidos de izquierdas.

Asimetría que se extiende todavía más sobre el otro eje de la política española, el que opone a nacionalistas y «constitucionalistas», eje donde el nacionalismo goza de una hegemonía exorbitante. La exhibición de banderas nacionalistas es un acto de libertad, pero la exhibición de banderas españolas es reaccionario; promover la articulación nacional de Cataluña desde su autogobierno (utilizando la educación o los medios de comunicación cuando no la más burda propaganda) es percibido como natural; pero una similar articulación nacional de España desde el Estado español sería una exhibición de fascismo represivo, literalmente «franquista»; promover el uso del catalán, vasco o gallego es bueno y liberador, incluso si ello se hace a costa de otras lenguas que, como el castellano, son habladas por la mayoría de la población en esas mismas CC.AA.; pero promover el uso del castellano en esas comunidades sería una agresión intolerable.

Más allá de los símbolos, este antifranquismo subyacente permite una tergiversación de la misma ideología y de la teoría política que hace pasar por progresista lo que dista de serlo y, con frecuencia, es simplemente conservador. Así, la centralización, que fue siempre jacobina y de izquierdas como garantía de igualdad jurídica y real, es hoy franquista y de derechas, mientras la descentralización, incluso la desigualdad (e incluso una desigualdad que bordea el privilegio medieval), escondida tras el discurso neoconservador y fuerista de la «diversidad», resulta ser progresista. La derecha era nacionalista mientras la izquierda (hay que recordarlo, porque se nos ha olvidado) era antinacionalista e internacionalista, pero hoy los términos parecen cambiados. Hoy los verdaderos neoconservadores (de lenguas, de culturas, de tradiciones, de medio ambiente, incluso de «coros y danzas») están a la izquierda más que a la derecha. Y así, aprovechando el sesgo del antifranquismo, el nacionalismo se exhibe seguro de sí mismo sin matiz alguno, e incluso el discurso independentista que es, en todo caso, extraconstitucional. Declararse independentista es glamoroso y no son pocos los intelectuales catalanes y vascos (y no los peores) que juegan a ello; pero declararse españolista es, por supuesto, cutre y despreciable, y definirse así sería caer en el ostracismo intelectual e incluso moral. De nuevo la sombra del franquismo, que sembró de sal la idea de Nación española mientras abonó cualquier otro nacionalismo.

Lo que no deja de ser paradójico, pues nada hay más parecido al viejo nacionalismo franquista que los nuevos nacionalismos (y nada más franquista, por cierto, que ETA misma): si aquél se empeñó en construir una Nación española desde el Estado, ¿no hacen ellos lo mismo desde sus CC.AA.? Si aquél tachaba al «ene-

migo» de antipatriota y «extranjero», ¿no hacen lo mismo? Si aquél se empeñó en imponer una lengua menospreciando las restantes, ¿no hacen ellos lo mismo? Nada más franquista, por ejemplo, que ese editorial unánime de los periódicos catalanes, apoyado/impulsado por el gobierno que los financia, reiterado por todas las asociaciones, grupos, comités o colegios, hasta silenciar por completo a quienes piensan de otro modo que, por supuesto, son acusados de «fascistas» (antes eran acusados de «rojos»; es lo mismo).

E incluso mas allá de la política nacional. Las dictaduras de derechas son inadmisibles, pero las de izquierdas (como Castro o Chavez, incluso Ahmedinayed o Gadafi) son simpáticas y el gobierno las trata con notable realismo político. Los golpes de estado de derechas (como el moderado golpe cuasiconstitucional de Honduras) dan lugar a reacciones fulgurantes y llamadas a consulta de embajadores, pero otros (en Irán, por ejemplo, con asesinatos de jóvenes estudiantes) son meros «asuntos internos» (Moratinos *dixit*). Y así mis alumnos en la Universidad conocen perfectamente el Holocausto y Hitler, pero ignoran por completo al GULAG y Stalin. Y Carrillo es recibido con ovaciones en todas las Universidades del país, pero Fraga (o el mismo Savater) no podría pasar de la puerta.

Desde esta perspectiva se entiende perfectamente el sentido de leyes como la de la memoria histórica y, sobre todo, la narrativa que la ha envuelto. Pues no se trataba de solucionar un problema, que sigue vivo (el de los enterramientos ilegales y clandestinos), cuestión que la ley deja de lado cuando debería ser su núcleo, un deber moral pendiente de la democracia. No, se trata de reavivar el anti-franquismo. Y nada exhibe más a las claras este inacabado (pero imprescindible) postfranquismo que la reivindicación inconsciente del mismo discurso franquista sobre la República hecha ahora desde la izquierda: unos eran buenos y otros malos (¿les suena?); un bando atentó contra la legalidad, el otro salvó la legalidad que quedaba (¿no decían eso ellos antes?); un lado hizo una revuelta violenta, el otro trataba de mantener el orden. Podría seguir. El mismo discurso de Franco, los mismos argumentos, aunque la valoración se haya invertido.

Hemos vivido, literalmente, en un postfranquismo reactivo pues contra Franco, tanto socialistas como nacionalistas viven mucho mejor y por ello se hacía necesario reavivar su figura no fuera a ser que su larga sombra se olvidara y con ella la asimetría en que reposa nuestra vida política ¿Para cuando pues un *post-post-franquismo*? Sospecho que la verdadera segunda transición es ésta: la que cierra la primera y nos permita pasar página desde una democracia que observa el mundo por el espejo del retrovisor de la memoria a una democracia a secas que mira de frente al futuro.

Pero eso es lo que ya empieza a ocurrir. El 75% de los españoles asegura que, cuando era niño o adolescente, se hablaba poco o nada de la guerra civil, que ha pasado a ser un tema de historia más que de memoria (porcentaje que sube al 85% entre los jóvenes). Recuerdan, como no podía dejar de ser, que España sufrió una guerra civil. Pero a los 75 años de aquel suceso un 33% recuerda que su familia perteneció al bando republicano, otro 20% recuerda que estuvo del lado de los nacionales, un 11% piensa que estuvo con ambos bandos y un 8%

que no estuvo con ninguno. Lo importante no son los porcentajes mismos (no tan desequilibrados, por cierto, si tenemos en cuenta la profunda deslegitimación de Franco y su régimen, constitutiva de la legitimidad democrática), sino el hecho de que el recuerdo muestra lo que hubo: una España fratricida y dividida al menos en tres bandos, los dos que lucharon y un tercero (nada menos que un 19%, según la memoria actual) que se vio arrastrado por ellos. Pero no deja de ser significativo cómo se «olvida» la identificación con el bando «nacional», al que pertenecían las familias del 25% de los mayores de 55 años pero sólo el 17% de las familias de los menores de 34. Dentro de pocos años la «memoria» recordará que no hubo «nacionales» en España.

La renovación generacional aleja, no ya la memoria de la guerra —de la que sólo algunos ancianos pueden presumir—, sino la del franquismo mismo. Y de nuevo encontramos que un 70% de los españoles actuales aseguran que en su familia se hablaba poco o nada del franquismo, porcentaje que sube al 77% entre los jóvenes, aunque ahora con una incidencia generacional distinta. Desde luego son ya mayoría (aunque justa, un 51%) quienes creen que el franquismo tuvo *cosas positivas y negativas* al tiempo, sin duda un dato sorprendente y que muestra que la ciudadanía ha madurado más que nuestros políticos y no se deja arrastrar por mensajes maniqueos. Pero ahora ese porcentaje sube significativamente al 55% entre los menores de 34 años (y desciende al 49% entre los mayores de 65), justo para quienes aquel período histórico es ya historia y no memoria. A pesar de todo, los jóvenes tienen mejor imagen del franquismo que los mayores.

Por fortuna estamos muy lejos de las dos España que se enfrentaron pronto hará un siglo. Es más, si hubiera que hablar de dos España, éstas estarían formadas por quienes piensan que la guerra fue culpa de «la derecha» y quienes piensan que la guerra fue la culpa de ambos bandos. Los primeros son el 30% de los españoles, pero los segundos son el 39% (sólo el 1,8% cree que la guerra fue culpa de «las izquierdas»). Y ni que decir tiene que son las izquierdas quienes atribuyen toda la responsabilidad a la derecha, y son éstas quienes distribuyen la culpa entre ambos bandos. Un dato que debe hacer meditar a todos.

Pero la desaparición de la guerra y el franquismo de la memoria para ubicarse —por fin— en la historia, marca un giro esencial en la cultura política de los españoles, un giro que camina en el sentido mismo de esta segunda transición en la que parece nos encontramos.

4. ¡ES LA POLÍTICA, ESTÚPIDO! UNA CRISIS DE MODELO

La crisis económica que se inicia en el 2007 hace aflorar todas las contradicciones y errores pasados, tanto los de la Transición misma como los cometidos durante la post-transición, de modo que España hoy tiene dos grandes problemas: en primer lugar, el pan nuestro de cada día, una economía obsoleta que hace aguas y amenaza con arrastrar el bienestar de los españoles, duramente conseguido, e incluso la estabilidad del euro y a la propia UE. Pero detrás de

las urgencias diarias, lo que se percibe con claridad es una democracia de baja calidad, y es de destacar que la crisis económica jamás habría tenido la profundidad actual de haber sido gestionada adecuadamente. Por el contrario, es el deterioro de las instituciones políticas lo que permitió no sólo un abandono de los problemas económicos sino incluso su ampliación. Es la política más que la economía lo que está fallando y es la falta de confianza y credibilidad de la política lo que actualmente mina la confianza en la capacidad de recuperación económica.

Aceptaré lo que salga del Parlamento de Cataluña. Cuántas veces se habrá arrepentido Zapatero de esa frase; tantas, casi, como ha negado haberla dicho. Pues si examinamos el programa electoral del PSOE del 2004 veremos que en el se proponía dar *un nuevo impulso autonómico para la España plural* mediante la reforma del Senado y la conferencia de presidentes. Poca cosa plasmada en el Pacto de Santillana, pronto olvidado. Pues el nuevo Estatuto salió del parlamento catalán con una mayoría búlgara, impropia de una sociedad democrática, casi el 90% de los votos. Pero lo que salió fue un texto «infumable», y el calificativo es de Alfonso Guerra, quien tuvo que emplearse a fondo para limpiar lo más evidente. Aun así, del parlamento español salió con sólo el 54% de apoyo, sin los votos del PP. Fue aprobado después por poco más de uno de cada tres catalanes, teóricamente los beneficiarios máximos de esa joya legislativa. Y ha sido laminado por el Tribunal Constitucional, sometido a presiones como jamás las tuvo. Para quines hace muchos años nos manifestamos al grito de *Libertad, Amnistía y Estatut de Autonomía*, pero lo hacíamos en la calle Bravo Murillo y no en las Ramblas, ha sido un doloroso aprendizaje: los nacionalismos viven de la reclamación perpetua y su lealtad constitucional jamás alcanza al mismo nacionalismo. El Estatut es la gota que ha colmado el vaso de de la deriva autonómica encendiendo todas las luces rojas.

Efectivamente, hoy somos muy conscientes de sufrir una excesiva descentralización en 17 gobiernos y otros tantos parlamentos legislando alocadamente, con un gasto público incontrolable y de hecho opaco incluso a la misma Hacienda, generando inmensas burocracias publicas o cuasipúblicas (como las televisiones autonómicas), con enormes ineficiencias, costes de transacción y parálisis. Basta acercarse a cualquiera de las varias CC.AA. uniprovinciales —por poner un ejemplo— y visitar la sede del gobierno (sin duda un flamante edificio renovado a cuya puerta esperaran media docena de automóviles de lujo), para acercarse luego a la sede del parlamento (otro flamante edificio nuevo a cuya puerta esperaran otra media docena de automóviles de lujo), y finalmente a la alcaldía de la capital o la diputación respectiva, y preguntar más tarde cuantos habitantes sufragan esa gigantesca administración, pues rara vez superan el medio millón de personas. O su productividad es única en el mundo, o lo público está parasitando las actividades productivas impidiendo el crecimiento. Algunos datos conocidos estos días muestran un grado de despilfarro que, más allá de la estupidez, bordea la obscenidad: una Comunidad Autónoma tiene más de 38.000 teléfonos móviles sufragados con dinero público; otra

tiene no una sino dos televisiones públicas; una tercera paga más de 1.600 coches oficiales; por supuesto, hay Universidades en cada ciudad y pronto habrá aeropuertos en todas, muchos perfectamente inútiles (León, Castellón, Ciudad Real). Se ha saqueado el presupuesto público con una absoluta falta de sentido común pero siempre en beneficios de los amigos políticos.

Es interesante constatar que el sondeo de Metroscopia certifica claramente que ese cansancio con el Estado de las Autonomías es, de nuevo, una opinión popular. Por supuesto, la mayoría sigue apoyándolo, como ha venido haciendo desde los comienzos de la democracia, aunque se trata ahora de un apoyo exiguo de sólo un 33%. Otro 15% de españoles pide mayores competencias para las CC.AA. (hace poco eran más del doble) y casi otro tanto (un 13%) pide claramente un Estado federal. Sólo un 9% demanda lisa y llanamente la independencia. Pero lo más destacado es que por vez primera un 25% (uno de cada cuatro españoles) pide *un Estado con un único gobierno central, sin autonomías*, lo que es algo radicalmente nuevo: el regreso a un Estado centralista en un postfranquismo radical.

Pero no es sólo el Estado autonómico lo que se ha ido de las manos, pues también el Estado central peca de ineficiencia notable. Para comenzar con el legislativo, sin duda el núcleo de cualquier democracia, es evidente que hoy tenemos un parlamento de baja calidad, con un Congreso esclerotizado y cuyo reglamento exige una reforma hace tiempo, y un Senado necesitado también de una profunda reforma constitucional que nadie es capaz de sacar adelante. La calidad del poder judicial no necesita comentario pues está en sus más horas bajas, ya hablemos del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial o de la justicia ordinaria, lenta y torpe, cuya muy negativa valoración contrasta con la de otros servicios públicos. Si pasamos al tercer poder, el ejecutivo, basta comparar la preparación y competencia de los altos cargos de los primeros gobiernos de la democracia con los actuales, y el resultado es sonrojante. España ha aceptado sin rubor que personas sin la más mínima calificación, con escasos estudios y menor experiencia, carentes de cualquier mérito o capacidad, puedan ser, no ya altos cargos, sino ministros, y no de ministerios políticos, sino incluso de ministerios con un importante componente técnico.

Y sobre este bosquejo, preocupante pero desgraciadamente nada exagerado, debemos añadir el profundo deterioro del cuarto poder, el de los medios de comunicación, cada vez más alejados de su papel moderador y volcados en la militancia, en darnos opiniones gruesas sobre todo, y doblemente fagocitados (con escasas excepciones): de una parte, por su alineamiento político, cada día más sectario y que lleva a veces a preguntarse quien sigue a quien, si los medios a los gobiernos o al contrario; pero en segundo lugar (y no menor), los medios han sido abducidos por las estrategias (y, recientemente, agobios) económicos de sus empresas editoras, de modo que vemos líneas editoriales zigzagueando en función de las exigencias de financiación, o de publicidad, o de nuevos canales.

Todo ello enmarcado por un gobierno postmoderno y líquido, que ha triturado sus compromisos electorales para embarcarse en la más absoluta irrealidad. Da

rubor chequear hoy algunos de los compromisos públicamente asumidos por el Presidente Zapatero. Algunas perlas extraídas de las hemerotecas:

- 15 de enero de 2007: «Vamos a superar a Alemania en renta per cápita. De aquí al 2010 les podemos superar perfectamente. Igualar y superar ligeramente».
- 3 de julio de 2007: «Lo enunciaré de forma sencilla pero ambiciosa: la próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España. No lo quiero con carácter coyuntural, lo quiero definitivo».
- 6 de septiembre de 2007: «Tenemos la tasa de paro más baja de la historia. El modelo económico español es un modelo internacional de solvencia y eficiencia».
- 11 de septiembre de 2007: «Haciendo uso de un símil futbolístico, se podría decir que España ha entrado en la Champions League de la economía mundial».
- 3 de marzo de 2008: «Prometo crear 2 millones de nuevos empleos».
- 24 de septiembre de 2008: «Superaremos a Francia en renta per cápita en tres o cuatro años. Esto no lo quiere ni oír mi amigo Sarkozy, pero es así».
- 18 de diciembre de 2008: «No; nadie lo sabía. En cuanto hemos entrado en una situación objetiva de crisis, he sido el primero en hablar de una crisis del sistema financiero internacional y de una crisis económica. En marzo comenzará a crearse empleo de manera intensa».

Citas que no alcanzan la profundidad metafísica de la siguiente: (17 de diciembre 2009): «*La tierra no pertenece a nadie, salvo al viento*».

Ante este panorama no sorprenderá que nada menos que el 78% de los españoles asegure que la situación política es mala o muy mala. Para añadir inmediatamente que la culpa de esta situación política la tienen los líderes políticos (56%) mucho más que la misma democracia (27%), que sigue contando con apoyo indiscutible (próximo al 80% según numerosos estudios).

Es interesante la lectura de la tabla adjunta, que muestra el grado de confianza / desconfianza de los españoles en diversas instituciones fundamentales de nuestra sociedad. No sorprende que en los primeros lugares encontremos instituciones como los científicos o la Universidad (si se hubiera preguntado por los «maestros» o los «profesores» el resultado hubiera sido igualmente favorable), pues se trata de una actitud positiva reiterada en numerosos estudios, tanto en España como en otros muchos países. Sí sorprende, sin embargo, que instituciones hace pocos años rechazadas por una gran mayoría por su conexión histórica con el franquismo ocupan hoy posiciones de enorme prestigio; hablo por supuesto de la policía, la Guardia Civil o el Ejército. Si sumamos el Rey, encontramos que no pocas de las instituciones menos representativas de la democracia son hoy las que reciben mayor confianza. Lo más interesante, sin embargo (y lo más preocupante, por supuesto), es el bajo prestigio que tienen instituciones políticas fundamentales como son el Gobierno del Estado, la televisión, la Iglesia, los bancos y, ya en los últimos lugares, las más representativas de la democracia: los políticos, los sindicatos y los partidos políticos.

P. 55.—*¿En qué medida le inspiran confianza, es decir, sensación de poder confiar en ellos, las siguientes instituciones o grupos sociales?*

(Puntuaciones medias en una escala de 0 a 10, en la que 0 equivale a que no le inspira ninguna confianza y 10 a mucha)

	Puntuación Media	Desviación típica
Los científicos	7.5	1.3
La Universidad	7.2	1.9
La policía	6.8	2.2
La Seguridad Social	6.7	2.2
El Rey	6.6	2.8
La radio	6.5	2.1
La Guardia Civil	6.5	2.5
El Ejército	6.3	2.6
El Defensor del Pueblo	6.1	2.4
Las ONG	6.1	2.4
Las fundaciones	6.0	2.2
El Tribunal Constitucional	5.7	2.5
El Parlamento	5.5	2.3
La prensa (los periódicos)	5.4	2.3
Los Tribunales de Justicia	5.3	2.4
Los jueces	5.3	2.4
Los funcionarios	5.3	2.3
Los empresarios	5.0	2.5
Los fiscales	5.0	2.3
Los Ayuntamientos	4.9	2.4
El Gobierno del Estado	4.4	2.7
La televisión	4.4	2.5
La Iglesia (católica)	4.2	3.1
Los bancos	3.8	2.5
Los políticos	3.8	2.5
Los sindicatos	3.6	2.7
Los partidos políticos	3.5	2.3
Las multinacionales	3.4	2.4

Datos recientes del CIS abonan esta misma perspectiva. Las instituciones con mayor grado de confianza son las Fuerzas Armadas (5,71) y la Monarquía (5,4); de hecho, las dos únicas que aprueban. Por el contrario, con el mayor grado de desconfianza encontramos al Gobierno (3,5) y los partidos políticos (2,9).

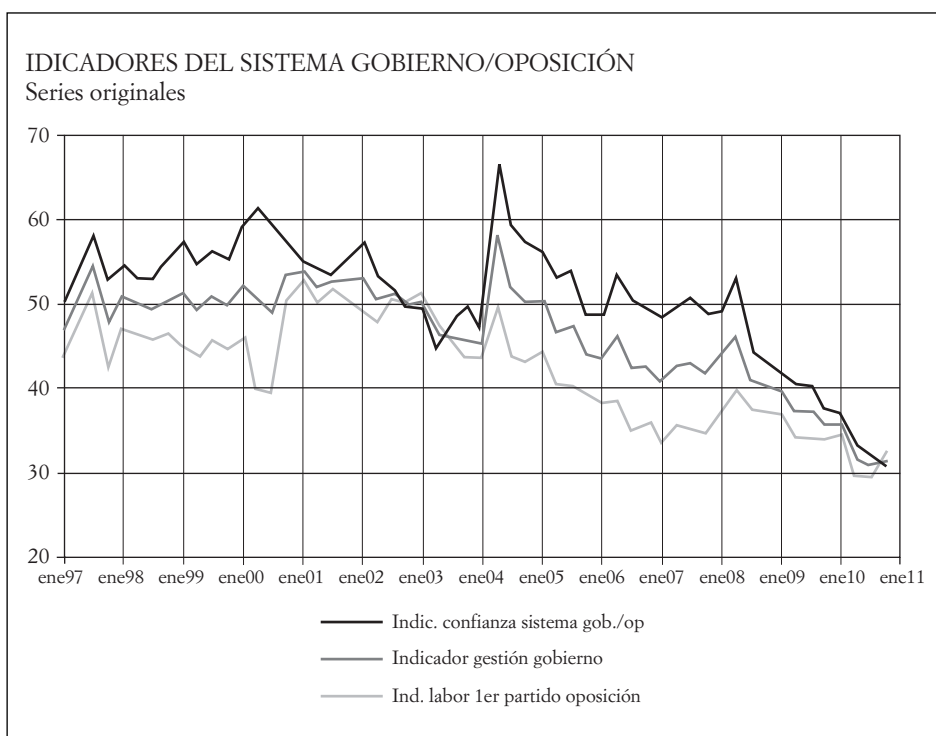
CIS			
Estudio nº 2.853. Barómetro de noviembre			Noviembre 2010
Pregunta 15			
A continuación, me gustaría que me dijese el grado de confianza que tiene Ud. en una serie de instituciones, utilizando una escala de 0 a 10 en la que 0 significa que no tiene Ud. ninguna confianza en ella y 10 que tiene mucha confianza.			
	Media	Desviación típica	(N)
La Monarquía	5.36	3.18	(2383)
El Gobierno	3.52	2.66	(2403)
El Parlamento	4.01	2.54	(2204)
El Gobierno de su Comunidad Autónoma	4.41	2.70	(2321)
El Parlamento de su Comunidad Autónoma	4.35	2.61	(2127)
El Tribunal Constitucional	4.32	2.55	(1933)
El Defensor del Pueblo	4.64	2.63	(1968)
Las Fuerzas Armadas	5.71	2.85	(2290)
Los partidos políticos	2.88	2.37	(2344)
Los medios de comunicación	4.58	2.49	(2365)
La Iglesia Católica	3.68	3.13	(2369)
El Consejo General del Poder Judicial	4.13	2.57	(1951)

La brecha que se ha abierto entre los políticos y la ciudadanía es de enorme magnitud. En concreto, el rechazo a los partidos en su forma actual es brutal. Los partidos *piensan solo en lo que les beneficia e interesa a ellos* (89%), *no tienen en cuenta lo que piensa la gente* (82%) y tal y como funcionan y están organizados *es muy difícil que logren atraer y reclutar para la actividad política a las personas más competentes y mejor preparadas* (79%). Los sondeos del CIS abonan en el mismo malestar: *está quien esté en el poder siempre busca sus intereses personales* (74%), *los políticos no se preocupan de lo que piensa la gente como yo* (76%). Lógicamente, los ciudadanos quieren participar en elecciones primarias en los partidos, abiertas a los militantes pero también a los votantes (57%). Y masivamente apoyan las listas abiertas (73%).

Un rechazo que afecta a los políticos en su conjunto que, con un 3,8 sobre 10 de confianza, reciben un varapalo como jamás había ocurrido en nuestra historia democrática. Así, el Presidente del Gobierno obtiene un rotundo suspenso (un 3,9), incluso mayor entre los jóvenes —un 3,8—, y mayor que el del Presidente Aznar,

que casi aprueba con un 4,6. Pero el líder de la oposición, Mariano Rajoy, no sale mejor parado y obtiene un 3,75, que desciende al 3,5 entre los jóvenes.

Datos reiterados por numerosos estudios y, concretamente, por los del CIS, que desde hace muchos meses ponen de manifiesto que los políticos son hoy considerados, detrás de la crisis económica y el desempleo, el tercer principal problema de España; casi uno de cada cuatro españoles considera que los políticos o los partidos son el principal problema. Y así, si acudimos a las series históricas de datos del CIS, lo que encontramos es un descenso brutal de la confianza en el gobierno y en la oposición que no hace sino empeorar continuamente desde las elecciones de 2004.



Que los políticos, los encargados de resolver nuestros problemas, sean ellos mismos uno de los principales problemas, no deja de ser paradójico y preocupante.

Cualquier observador detecta inmediatamente que el país que fue denominado hace un par de décadas la Prusia del sur sufre hoy un serio riesgo de italianización (una sociedad sin Estado o peor, con un Estado patrimonializado por partidos nacionales o regionales y por grupos económicos), e incluso

de argentinización (con un gobierno populista que se pone al frente de las manifestaciones contra la oposición a la que pretende expulsar del espacio democrático).

Si hubiera que buscar un solo culpable de ese deterioro general (aunque hay más), sin duda el principal es el peso agobiante de los partidos políticos, sujetos ya monopolísticos, no del poder, sino de toda la vida pública e incluso cívica (hasta el arte —el cine y la plástica— se ve afectado por su perversa influencia), que han anulado la vitalidad del parlamento con sus listas cerradas y bloqueadas, generan ejecutivos sectarios al imponer a sus militantes, han fagocitado a la Justicia dividiéndola en supuestos «progresistas» y «conservadores», sobornan a diario los medios de comunicación, con los que mantienen una relación típicamente sado-masquista, y pretenden (y consiguen) penetrar en la sociedad civil (en el arte, la intelectualidad, la Universidad) para hacerla militar en una u otra dirección. El resultado es que la política se pone al servicio de los partidos, cuyo único objetivo es ganar elecciones e incluso (lo que ya es chocante) ni siquiera eso: les basta con ganar el poder si, perdiendo elecciones, consiguen apoyos parlamentarios suficientes. No es pues de sorprender el alejamiento creciente entre la «clase política» (término desgraciadamente adecuado) y la ciudadanía, aquella hiperpolitizada, ésta despolitizada, aquella perpetuamente en la trinchera, ésta desmovilizada.

Sobre esta crisis política e institucional, de indudable relevancia, se cierne hace meses la crisis económica, luego recesión, hoy ya brutal depresión. Pero cuya virulencia le debe mucho a un mal gobierno que ha atendido sólo al corto plazo disfrutando de un modelo que todos sabíamos estaba condenado al fracaso. Gobiernos que negaron la burbuja inmobiliaria y el brutal endeudamiento privado cuando era ya evidente; que negaron la crisis primero y la recesión después; y que han negado finalmente la gravedad de la situación confiando, como ludópatas, en la suerte hasta ser llamados a capítulo por nuestros socios en la unión monetaria. ¿Por qué ese «negacionismo»? Por intereses de corto plazo, a la espera de las siguientes elecciones generales del 2008, o de las elecciones catalanas, o ahora de las municipales y autonómicas.

La realidad es que hemos generado un inmobiliario esclerótico financiado por las cajas de ahorro dependientes a su vez de las CC.AA., asumiendo riesgos políticos cuando no bordeando la corrupción misma. Una industria de poco valor añadido cuya deslocalización estaba cantada. Una bajísima productividad y menor uso del I + D; una fuerte dependencia energética con una energía cara; un mercado de trabajo muy rígido y dualizado (¿cuándo ha estado el despido más «barato» que ahora?) y un desempleo brutal; un altísimo nivel de economía sumergida. En resumen, hace tiempo que no somos eficientes en términos de una economía industrial (como sí lo son Alemania o Francia), pero tampoco lo somos en una economía del conocimiento (como sí lo son los países nórdicos) y nos movemos en una difícil tierra de nadie.

Y si los datos políticos en los que he centrado este trabajo son negativos, sus consecuencias sobre la economía son demoledoras: una tasa de desempleo superior al 20%, que dobla la media de los países de la UE y asciende a más del 40%

entre los jóvenes; 1.300.000 hogares en los que todos sus integrantes están en paro; una deuda pública creciendo a una tasa interanual del 20%; una deuda externa que es 1,5 veces el PIB; y una tasa de crecimiento del 0,0%. Lo que augura no ya meses, sino años de dolor y sufrimiento para muchos ciudadanos que han visto frustradas sus esperanzas e ilusiones.

Y así, saltamos con excesiva alegría de la «exhuberancia irracional de los mercados» (Greenspan), de la exhuberancia del endeudamiento privado, a la exhuberancia del endeudamiento público, con un elevado coste intergeneracional. De modo que en lugar de resolver los problemas de nuestros hijos con nuestros esfuerzo, lo que estamos haciendo ahora es resolver nuestros problemas con los esfuerzos futuros de nuestros hijos.

5. EL FUTURO DE ESPAÑA; HACER LA NACIÓN

Sea por unas u otras razones, lo cierto es que el proyecto político de una segunda transición se ha asentado ya en la sociedad española, de modo que casi tres de cada cuatro españoles creen que *en el momento actual, España necesita una «segunda transición» que, con el mismo espíritu de pacto y concordia de la primera, acometa la modificación y actualización de muchos aspectos de nuestro actual sistema político*. España necesita embarcarse urgentemente en una segunda generación de reformas, lo que es aún más evidente para los jóvenes (76%) que para los mayores (67%).

Reformas que no afectan (o no deberían hacerlo) a elementos sustanciales. La democracia misma no está en juego y su apoyo no ha descendido un ápice en estos años. Otro tanto ocurre con el apoyo a la Corona. La forma en que el Rey ha desempeñado su magistratura recibe un 7,3 sobre 10. Una gran mayoría cree que *sin el Rey, la Transición no hubiera sido posible* (78%); cree también que la monarquía *está firmemente consolidada* (74%) incluso entre los jóvenes (69%); cree que es capaz de *adaptarse a la exigencias de de cada momento* (70%), e incluso que *aporta estabilidad y serenidad* (55%). De hecho, sólo uno de cada tres preferiría una República, aunque dos de cada tres sí creen que *conforme pasa el tiempo tiene menos sentido*. Y tampoco parece estar afectada seriamente la sucesión en la Jefatura del Estado. El 79% (incluidos los jóvenes) cree que el Príncipe *contará con el apoyo y tiene legitimidad para suceder al Rey*, y nada menos que el 86% (de nuevo incluidos los jóvenes) cree que el Príncipe *está preparado para desempeñar adecuadamente las funciones de Jefe del Estado*, y su valoración es superior a la de figuras reconocidas como Felipe González o Javier Solana.

Si ni la democracia ni la monarquía están en juego, otra cosa es si hablamos de la Constitución, aunque incluso ahora los juicios son moderados. Que la Constitución *tiene cosas buenas y malas* lo afirma el 54%; otro 39% dice que es una buena Constitución y sólo un 5% cree que es mala. Pero cuidado, si un 37% cree que necesita reformas y retoques profundos (que sube al 42% entre los jóvenes),

la mayoría asegura que *sólo necesita algunos retoques parciales y en conjunto sigue siendo válida* (58%).

El sondeo actual no nos permite profundizar en los elementos que deberían ser objeto de esta «segunda transición», pero numerosos indicios permiten sospechar que se trata, más que de reformar lo que se hizo, de terminar y completar lo que no se hizo o enderezar lo que se hizo mal. La nostalgia con la que la sociedad española recuerda la primera transición y, sobre todo, el consenso que entonces se supo alcanzar, nos indica que, más que ir mas allá de aquel proyecto político, se trata de regresar a él y completarlo. Y son muchos los vectores en los que se debe avanzar.

El más reciente barómetro del CIS (noviembre del 2010) nos permite indagar en las prioridades de reforma de los ciudadanos: la reforma de la justicia (9,7%), el sistema autonómico (6,9%), las instituciones (Congreso, Senado, Ley Electoral), la garantía de los derechos sociales (5,2%) serían las principales. Y una vez más, como sociólogo con décadas de experiencia detrás, me sorprende la inteligencia colectiva que es capaz de penetrar con profundidad y sencillez en los problemas más complejos.

Pregunta 10a

¿Y qué aspecto concreto de la Constitución cree Ud. que habría que reformar? (RESPUESTA ESPONTÁNEA) (UNA SOLA RESPUESTA).

El sistema autonómico. Las autonomías	6.9
La reforma de los estatutos de autonomía	3.9
El derecho de autodeterminación, el federalismo	1.0
La monarquía como forma de gobierno	3.4
La sucesión de la Corona	4.7
Reforma de la Justicia	9.7
Mayor garantía de las libertades y derechos individuales	2.1
Garantizar los derechos sociales	5.2
Garantizar el derecho al trabajo	3.1
Fomentar la plena igualdad de las mujeres	1.1
Garantizar el laicismo del Estado	.2
Reformar las instituciones (Congreso, Senado, Ley Electoral)	4.6
Hay que actualizarse adaptarse a los nuevos tiempos	5.3
Que se cumpla en su totalidad	.6
Reforma de la Ley del Menor	3.4
Endurecimiento de las penas y cumplimiento de las condenas	4.6
Respuestas referidas a modificaciones legislativas	4.9
Otras respuestas	3.4
N.S.	22.9
N.C.	8.7
(N)	(1335)

Y efectivamente, sin duda el primer tema a abordar ya se ha apuntado: el Estado de las Autonomías se ha ido de las manos y lo que se pretendía fuera un mecanismo de integración de los viejos nacionalismos ha acabado degenerando

en un mecanismo de reforzamiento de nacionalismos, de demanda constante de mayores competencias, de producción de sentimientos independentistas e incluso de rechazo de lo español. Lo que está en juego no es ya el lugar de Cataluña o el País Vasco en España, indiscutiblemente asentado, sino el lugar de España y lo español en esas CC.AA., singularmente en la primera de las mencionadas. No se discute el derecho de los catalano-hablantes a utilizar su lengua, sino el derecho de los castellano-hablantes a utilizar la suya; no se discuten sus banderas, himnos o símbolos, sino los de España. El debate sobre la fiesta de los toros y su prohibición en Cataluña —casi una venganza por el fracaso del Estatuto— es todo un símbolo del camino iniciado. Recordemos que sólo un 5% de los ciudadanos españoles rechazan serlo y se declaran sólo catalanes o vascos; todos los demás, el 95%, se sienten españoles en alguna medida. El discurso nacionalista ocupa en el escenario político, ya sea el de las CC.AA. o el nacional (e incluso en el internacional), un espacio exorbitante para su representación real.

El segundo vector de reformas afecta, como también ha quedado dicho, a los partidos políticos, su financiación, su democracia interna, sus sistemas de reclutamiento de líderes y su monopolio sobre la representación política. Las barreras de acceso a la política se han cerrado para quien no juegue a través de los partidos asentados y debe modificarse el sistema de listas cerradas y bloqueadas.

Un tercer espacio donde el malestar con la situación actual es mayor es el referido a la justicia. Y hablamos tanto de la politización a que se han visto sometidos sus órganos de mayor representación —el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo y, sobre todo, el Tribunal Constitucional— como al funcionamiento de la justicia ordinaria, lenta e ineficiente, uno de los pocos servicios públicos cuya valoración se ha mantenido inequívocamente baja durante todos estos años.

La administración pública, por otra parte, ha demostrado que en ocasiones puede ser, no ya eficiente, sino modélica. Servicios como la Agencia Tributaria, las Oficinas del Catastro, la Seguridad Social o la Dirección General de Tráfico, por citar algunos, ponen de manifiesto que el Estado español es capaz de actuar con enorme eficacia utilizando todos los instrumentos de las tecnologías de la información. Tampoco hay un exceso de funcionarios si se compara a España con otros países europeos. Pero sobran en algunos sitios (hay unos 8.000 ayuntamientos y han proliferado los asesores o consejeros que dan empleo a militantes de los partidos) y faltan en otros (por ejemplo, faltan en el servicio exterior o en la administración local). Y en general sigue manteniendo la misma estructura que en los años 70 y no se ha adaptado ni al sistema de CC. AA., ni a la Unión Europea (que también ha asumido numerosas competencias), ni a las nuevas tecnologías de la información.

El mismo sondeo del CIS nos indica que poco o nada satisfechos con el funcionamiento del Parlamento están el 66% de los españoles. La reforma del Congreso exigiría una simple revisión del reglamento para darle mayor vitalidad y reforzar el control del Gobierno sobre el Congreso y no al contrario, el control del Gobierno sobre el Parlamento. Más compleja, aunque más necesaria aún, sería la reforma del Senado para hacer una verdadera cámara territorial al estilo del Bundesrat alemán. Pero ello

exige una reforma constitucional en regla, lo que, como ya dijimos, es casi imposible (habría que comenzar reformando el mecanismo de reforma de la Constitución).

Pero por encima de todo lo que se echa de menos —y sería imprescindible para avanzar— es regresar a la cultura del pacto y del consenso y a la lealtad constitucional que casi todos los partidos exhibieron durante la Transición. Esto es un problema de educación y de principios, más que de reformas. Es evidente para cualquier observador que España hace meses que necesita un gran pacto de Estado con un gobierno amplio, si no de concentración, sí al menos bipartidista. Lo ha hecho Sarkozy en Francia, antes Merkel en Alemania, ahora Obama en Estados Unidos. España está en una situación de emergencia, pero los partidos no se ponen de acuerdo a pesar de que el Rey lo ha pedido ya en varias ocasiones. Necesitamos unos nuevos pactos de la Moncloa, económicos pero acompañados, como áquel, de unos pactos políticos para revisar la ley electoral y encarrilar el proceso autonómico. Sin embargo, lo obvio y necesario es hoy imposible. Si los políticos no hacen lo que resulta obvio a cualquier observador, ¿cómo van a ser valorados por la ciudadanía?

Lo que me lleva a lo que hoy es preocupación esencial de ciudadanos y políticos: la reforma del modelo productivo español, un capítulo urgente de reformas de esta «segunda transición»: el control del gasto público y de los excesos del Estado de Bienestar; revisar las jubilaciones y asegurar la viabilidad del sistema; facilitar la creación y cierre de empresas; potenciar el espíritu empresarial, demonizado por décadas de estigmatización de la imagen de los empresarios; revisar en profundidad el mercado de trabajo y el sistema de negociación colectiva; reforzar la unidad del mercado, tanto dentro de España como hacia fuera implantando un *Made in Spain* único; liberar a las cajas de ahorro de su control político profesionalizándolas; potenciar el I+D+I y reformar la educación a través de un gran pacto que la dote de estabilidad. Son todas medidas que no por sabidas son menos urgentes, pero que permanecen en la agenda abandonadas por gobiernos que atienden sólo a sus intereses cortoplacistas.

Hacia 1968, coincidiendo con el trauma de la ocupación soviética de Praga, la revuelta de París y la emergencia de la nueva izquierda, más orientada a la cultura que a la revolución, se instalaba en la ciencia social el giro lingüístico que había dominado el pensamiento filosófico desde comienzos del siglo xx. Fascinados por el carácter creativo («performativo», dice la jerga) del lenguaje, el constructivismo (como pronto se denominará) dará el vuelco hacia el más rotundo idealismo al hacer suya una vieja sospecha: las cosas no son de ningún modo sino sólo de aquel que entre todos acordamos. Si Joyce, cansado quizás de las *Tesis sobre Feuerbach*, proponía cambiar de conversación ya que no era posible cambiar el mundo, los constructivistas nos aseguran que el modo más fácil de cambiar el mundo es cambiar de nombre a las cosas.

Pues bien, el zapaterismo no es sino constructivismo político, la postmodernidad transformada en gestión colectiva. La política clásica era del orden del hacer, se situaba en el plano de la materia, pretendía cambiar las cosas, tenía un programa, a veces incluso dos, uno máximo, revolucionario, y otro táctico. Su objetivo

era conseguir amplias mayorías que dieran respaldo a un proyecto de transformación social. Ya no hay programa sino táctica pues se cambia el mundo al hablar. Estamos en la política del decir, no del hacer, una política expresiva, de comunicación pura. Es el giro lingüístico en la política en la que la forma es la sustancia misma. A medio camino entre el idealismo y el maquiavelismo (apariencia de poder es poder) del *framing*, el control de la agenda y la comunicación, la política del decir deviene pragmatismo puro, *realpolitik* al servicio de un único proyecto: aguantar en el poder. Transformados los partidos en puras máquinas electorales constituidas por profesionales de la política, su objetivo fundamental es alimentar a sus militantes asegurando su peculio. Ya ni siquiera pretenden ganar elecciones pues les basta con ganar el poder, cosa que puede hacerse pactando desde la minoría. Crecen así los gobiernos pluripartidos, literalmente paretianas *combinazioni* de las elites de los zorros, que parcelan el poder en cuotas y las distribuyen para el mayor provecho de las minorías coaligadas.

España tiene inmensos retos por delante y debemos correr mucho para no ir marcha atrás. El mundo está cambiando a velocidad de vértigo con la emergencia de inmensos países que están moviendo el centro de gravedad desde el Atlántico hacia el Pacífico, desde Europa a Asia. La UE no acaba de articularse como un sujeto en ese nuevo escenario y, por el contrario, se renacionaliza y, no ya el Reino Unido, sino Francia e incluso Alemania, parecen querer jugar al margen y no a través de la UE. Otro tanto le ocurre a los Estados Unidos, cuya agenda asiática le ha tomado la prioridad a la europea. Todo ello deja a España con una débil cobertura externa justo cuando el futuro del país está, más que nunca, fuera de nuestras fronteras. Vamos a tener que competir mucho y duro en los próximos años, en Europa, en América Latina, en Asia. Y debemos prepararnos para un mundo que se avecina complejo y en el que España, con 45 millones de habitantes y un PIB que no llega al 2% del mundial, es un país pequeño, muy pequeño, que pierde posiciones a toda velocidad (sólo este verano pasado el país que, según Zapatero, había sobrepasado a Italia y se aprestaba a sobrepasar a Francia, ha sido dejado atrás por Canadá, Rusia, India e Italia, pasando así del octavo lugar al duodécimo en el *ranking* mundial del PIB). Las reformas son sólo el primer paso, son sólo la puesta a punto del atleta; luego debe salir a competir en la arena. Hoy no estamos siquiera en condiciones de salir a la palestra. No podemos perder el tiempo otra vez mirando al pasado para rememorar injusticias que no tienen ya arreglo, o mirar adentro, ensimismados, para preguntar cuántos somos o si somos galgos o podencos. Una vez más España debe mirar adelante y afuera para hacer nación, hacer país, construir España y buscar su lugar en el mundo.